

Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, **en representación del Director General de Ingresos y del Recaudador de Rentas, ambos de dicha Secretaría;** y Jefe del Departamento de Control de Registro en suplencia por ausencia del **Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el Estado de Nayarit.** A lo anterior, el Juez acuerda: téngase por hecha la relación que antecede para todos los efectos legales a que haya lugar.

Abierto el período probatorio, la Secretaria hace relación de las pruebas documentales que la parte quejosa acompañó a su escrito de demanda y de la prueba documental que el Jefe del Departamento de Control de Registro en suplencia por ausencia del Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el Estado de Nayarit, adjuntó al rendir su informe justificado. A lo que el Juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas documentales antes relacionadas, y sin existir pruebas pendientes de recibir y desahogar, se da por concluido el período probatorio.

Abierto el periodo de alegatos, la Secretaria hace relación de los alegatos formulados por el agente del ministerio público adscrito a este Juzgado de Distrito, en su



V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto **887/2021**; y

PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el **nueve de agosto de dos mil veintiuno**, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, **Luis Eduardo Fuentes Olivo**, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se indican:

- Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit.

- Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit.
- Director General de Ingresos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit.
- Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Nayarit.
- Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit

ACTOS RECLAMADOS

a) Del Honorable Congreso del Estado Libre y soberano de Nayarit, la discusión, aprobación y expedición de la ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2021, en particular el artículo 20 fracción I y XVII, en relación con los numerales 11, 12 y 13.

SEGUNDO. Admisión. Por auto de diez de agosto



registró en el libro de gobierno de este juzgado con el número **887/2021**, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, se dio la intervención que corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo conforme al acta que antecede.

CONSIDERANDO

PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como la fracción XXIV del Apartado Cuarto del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República

Mexicana, y al número, la jurisdicción territorial y la especialización por materia de los tribunales de Circuito y de los juzgados de Distrito, ya que los actos reclamados se atribuyen a autoridades circunscritas a su jurisdicción territorial.

SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados.

De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que los actos reclamados son los siguientes:

- La discusión, aprobación, expedición, y orden publicación de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, específicamente el artículo 20, fracciones I y XVII, en relación con los numerales 11, 12 y 13 de esa legislación.
- La aplicación de los preceptos reclamados.

Al respecto, tiene aplicación la jurisprudencia 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de dos mil, Novena Época, de rubro:

les reclama, esto es, su intervención en el proceso legislativo de creación de las normas legales tildadas de inconstitucionales.

Aunado a que la existencia de la citada Ley de Ingresos para el Estado de Nayarit para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno no está sujeta a prueba, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimiento Civiles y en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2ª/J.65/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 260, Tomo XII, Agosto de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece:

“PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo.”

Igualmente es aplicable la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,



visible en la página 15, Tomo 65, Primera Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice:

“LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA.

El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba.”

Por otro lado, el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado en representación legal del Director General de Ingresos y del Recaudador de Rentas, ambos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, manifestó al rendir su informe justificado que no es cierto el acto de aplicación de las normas tildadas de inconstitucionales que la parte quejosa les reclama.

Sostiene el citado Director General Jurídico, que lo anterior es así tocante al Director General de Ingresos de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, en virtud de que dicha autoridad únicamente se aboca a la inspección de documentos presentados para el trámite pertinente en términos de lo dispuesto por los artículos 4 y 19, fracción

Sin embargo, deben tenerse por ciertos los actos a dichas autoridades por dos razones, porque las responsables sí participan en la aplicación de las normas reclamadas y porque con las pruebas ofertadas por la parte quejosa se acredita el acto de aplicación a ellas atribuido.

1 “Artículo 4. La representación de la Secretaría, así como la planeación, trámite y resolución de los asuntos que le competen, corresponden al titular de la Dependencia, quien para su mejor distribución y atención, podrá delegar algunas de sus facultades a los servidores públicos subalternos, sin perder por ello, la potestad de su ejercicio, excepto aquellas que en términos de las disposiciones legales aplicables tengan el carácter de indelegables.

$$(\dots)$$

STEPHANIE GISELLE AGUIAR IBANEZ
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.01.99.7
12/07/22 14:54:56



del Estado de Nayarit, disponen:

“Artículo 19. Al frente de cada dependencia o entidad habrá un titular quien, para el despacho de los asuntos de su competencia, se auxiliará de las Subsecretarías, Direcciones Generales, Direcciones de Área, Jefaturas de Departamento, Coordinaciones y demás servidores públicos previstos en los decretos, acuerdos, reglamentos o manuales de organización respectivos con base en el presupuesto de egresos autorizado.

“Artículo 33. A la Secretaría de Administración y Finanzas corresponde, además de las atribuciones constitucionales las siguientes:

 $(..)$

XVI.- Recaudar y administrar los impuestos, derechos, contribuciones de mejoras, productos, aprovechamientos y demás ingresos que el Estado tenga derecho a percibir en los términos de las leyes fiscales aplicables, y convenios suscritos en materia de colaboración administrativa en materia fiscal;

(...)

XXII.- Notificar los créditos fiscales, determinar sus accesorios y en su caso, aplicar el procedimiento administrativo de ejecución; efectuar devoluciones de cantidades pagadas indebidamente, autorizar su pago diferido o en parcialidades con garantía del interés fiscal, clausura de establecimientos e imposición de multas y cobros de la hacienda pública estatal, así como los derivados de los convenios de colaboración administrativa en materia fiscal federal que se celebren con el Gobierno Federal;

(...)"

“Artículo 3.- Para el Despacho de los asuntos de su competencia, la Secretaría Contará con la estructura orgánica administrativa siguiente, cuyos titulares en ejercicio de sus funciones se conducirán en términos de las disposiciones aplicables y se sujetaran a los objetivos, estrategias y ejes del Plan Estatal de Desarrollo vigente.

$$(\dots)$$

II.2 Dirección General de Ingresos.

(...)

Como se puede apreciar de la transcripción anterior, la Dirección General de Ingresos es un

organismo de la Administración Pública Estatal, dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyas funciones primordiales son, entre otras, auxiliar a la recaudación de la hacienda pública del Estado de Nayarit, de lo que se sigue que dicha autoridad responsable sí participa en la recaudación de impuestos, contrario a lo sostenido al rendir su informe justificado por conducto del Director General Jurídico de la Secretaría en cuestión.

Además, en la especie con las pruebas documentales ofertadas por la parte quejosa se acredita el acto de aplicación reclamado al Recaudador de Rentas de dicha Secretaría, por las razones que a continuación se indican.

En efecto, la parte quejosa exhibió con el escrito de demanda:

I. Copia certificada de la factura electrónica con folio fiscal 827140d0-9-e35-4108-93f4-ef9961255891, expedida a nombre del quejoso por la Secretaría de Administración de Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, por la cantidad de \$14,759.48 (catorce mil setecientos cincuenta y nueve pesos 48/100 moneda nacional), respecto de los conceptos de “INS. COMPRAVTA. MOB. PREST



“HIPOTE.”, “IMP. PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACIÓN”, “IMP. PARA LA ASISTENCIA SOCIAL”, “IMP. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT” “DER INSCR. INSTRUM. PÚBLICO O PRIVADO”, “DER. CANCELACIÓN DE INSCRIPCIONES”, “POR EL REGISTRO DE PODERES DE CUALQUIE” y “APORTACIÓN A LA CRUZ ROJA MEXICANA” (fojas 8 y 9 ídem).

II. Copia certificada de la escritura pública número 17,516 (diecisiete mil quinientos dieciséis) pasada ante la fe de la Notario Público número Cinco, con residencia en Tepic, Nayarit, de la cual se advierte que Luis Eduardo Fuentes Olivo en su carácter de comprador, formalizó un contrato de compraventa con Luz Leticia Olivo Estrada y José Luis Fuentes López en su carácter de vendedores, respecto del bien inmueble que ahí se indica.

De la documental de referencia también se advierte que **Luis Eduardo Fuentes Olivo** formalizó un contrato de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria, con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT).

Por tanto, dichas documentales concatenadas entre sí adquieren eficacia probatoria, toda vez que con las copias certificadas ante Notario Público, de la factura electrónica con folio fiscal 827140d0-9-e35-4108-93f4-

ef9961255891, expedida a nombre del quejoso por la Secretaría de Administración de Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, se desprende que éste pago la cantidad de \$14,759.48 (catorce mil setecientos cincuenta y nueve pesos 48/100 moneda nacional), respecto de los conceptos de “INS. COMPRAVTA. MOB. PREST HIPOTE.”, “IMP. PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACIÓN”, “IMP. PARA LA ASISTENCIA SOCIAL”, “IMP. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT” “DER INSCR. INSTRUM. PÚBLICO O PRIVADO”, “DER. CANCELACIÓN DE INSCRIPCIONES”, “POR EL REGISTRO DE PODERES DE CUALQUIE” y “APORTACIÓN A LA CRUZ ROJA MEXICANA”, esto es, de dicha probanza se advierte que existe un acto de aplicación de las normas tildadas de inconstitucionales en el presente juicio de amparo, en razón de que la parte quejosa pagó dicha cantidad por los conceptos referidos, es decir, el quejoso ya fue sujeto de los aludidos preceptos legales; del mismo modo, de la escritura pública número 17,516 (diecisiete mil quinientos dieciséis) pasada ante la fe de la Notario Público número Cinco, con residencia en Tepic, Nayarit, se advierte que Luis Eduardo Fuentes Olivo en su carácter de comprador, formalizó un contrato de compraventa con Luz Leticia Olivo Estrada y José Luis Fuentes López en su carácter de



vendedores, respecto del bien inmueble que ahí se indica, de la que también se aprecia que **Luis Eduardo Fuentes Olivo** formalizó un contrato de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria, con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT); además, debe decirse que de la misma se desprende que el valor del inmueble ahí descrito es por la cantidad de **\$1'452.000.00 (un millón cuatrocientos cincuenta y dos mil pesos 00/100 moneda nacional)**, cantidad que al realizar una operación aritmética respecto de la tasa de causación del cero punto seis por ciento (0.6%) sobre el valor del bien inmueble adquirido, que establece el artículo 20, fracción I, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, arroja un total de **\$8,712.00 (ocho mil setecientos doce pesos 00/100 moneda nacional)**, que corresponde al concepto de **"DER.INSCR.INSTRUM.PÚBLICO O PRIVADO"**, que el quejoso pago el diecinueve de julio de dos mil veintiuno, tal y como se aprecia de la factura aludida.

Documentales que tienen valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2.

Aunado a lo anterior, las referidas documentales se adminiculan, además, con la copia de la escritura antes referida, que adjuntó la autoridad responsable Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Nayarit, al rendir su informe justificado, de la que se aprecian los sellos y firma de la aludida autoridad registral, en los cuales se indica que dicho instrumento fue debidamente inscrito, por haber sido pagados los derechos correspondientes.

Instrumentos que administrados entre sí, ponen de manifiesto el monto pagado por el quejoso por los conceptos de mérito; por tanto, resultan suficientes para acreditar el acto de aplicación de los preceptos tildados de inconstitucionales.

Atento a lo expuesto, contrario a lo que aducen las autoridades responsables Director General de Ingresos y Recaudador de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en Tepic, por conducto de su representante legal, no procede el sobreseimiento del presente juicio de amparo por inexistencia del acto reclamado.

QUINTO. Causales de improcedencia. Al ser el estudio de las causales de improcedencia de orden público y preferente a las cuestiones de fondo, de conformidad con



lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede a analizar las que invocan las autoridades responsables.

Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia número 814, visible en la página 553, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Compilación 1917-1995, del rubro que dice:

“IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO”.

En ese orden, es preciso señalar que el Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit, por conducto del Subsecretario de Asuntos Jurídicos, al rendir su informe justificado manifestó lo siguiente:

“...Referente a los actos reclamados no se hace valer agravio alguno, es decir, no es combatido por vicios propios algún acto en específico de autoridad en específico de cada autoridad del cual se duele el peticionario de garantías; y en tal supuesto debe de sobreseerse el presente juicio de amparo de conformidad con el artículo 61, fracción XXIII y 108 de la norma aplicable en razón de que no opera la suplencia de los agravios. Cobrando aplicación por analogía la siguiente jurisprudencia de la Décima Época, número Registro: 2010097, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 23, octubre de 2015, Tomo III, pagina: 2248: (La transcribe)”.

Dicho alegato debe desestimarse en razón de lo siguiente.

STEPHANIE GISELLE AGUIAR IBANEZ
70.6a;66.20.63.6a;66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.99.7
12/07/22 14:54:56

[...]

“Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:

[...]

[...]

De conformidad con la fracción III del segundo numeral citado, es un requisito esencial de la demanda que en caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, la parte quejosa deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; en tanto, que la



Ahora, es evidente que del escrito inicial del presente juicio de amparo, se aprecia la existencia de argumentos que contienen razonamientos jurídicos concretos, la precisión del agravio o lesión, así como los motivos que los generan que incluyen causa de pedir respecto de los actos atribuidos a las autoridades responsables, consistentes en la discusión, aprobación, expedición y orden de publicación de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en específico de los numerales 20, fracciones I y XVII, 11, 12 y 13 para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, los cuales no se reproducen en obvio de repeticiones innecesarias y que más adelante se resumen, lo que prueba para quien esto resuelve que se le proveyó de argumentos jurídicos concretos, para razonar en el sentido en que se resolverá, de ahí que resulte **infundada** la causal analizada.

En consecuencia, se declara infundada la causa de improcedencia en estudio.

Por su parte, el Director Jurídico Contencioso de la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, en representación del Director General de Ingresos y del Recaudador de Rentas de dicha Secretaría, en su informe justificado manifestó que en su concepto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, ya que la demanda de amparo no se presentó en forma oportuna dentro del plazo de quince días, sino que se hizo en forma extemporánea.

En la especie el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo en Vigor, dispone lo siguiente:

“ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: (...)

XIV. *Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.*

No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnabile en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso.

Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se



entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad.

Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento...”

El artículo transcrito de la Ley Reglamentaria de los arábigos 103 y 107 Constitucionales, en su primera parte se refiere a la oportunidad de la presentación de la demanda en el juicio de garantías, la cual está prevista en el ordinal 17 de la Ley de la Materia Vigente, que indica que si el precitado medio de control constitucional no se promueve dentro de los términos previstos entonces se entenderá que el acto reclamado fue consentido tácitamente.

Por su parte, los preceptos 17 y 18 del propio ordenamiento, establecen:

“Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo:

- I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días;
- II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años;
- III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o

IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo.”

“Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor.”

De la anterior transcripción, se aprecia que los dispositivos 17 y 18 del citado ordenamiento legal, estatuyen el término genérico para la interposición del juicio de garantías, a saber de quince días, así como que tal plazo se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame, al en que haya tenido conocimiento de él o de su ejecución o al en que se hubiese ostentado sabedor del mismo.

Ahora bien, el acto reclamado en la demanda de garantías consiste en la inconstitucionalidad del artículo **20**,



Por otra parte, del líbello inicial de demanda, se advierte que fue presentado en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, el día **nueve de agosto de dos mil veintiuno**, de donde se determina que la parte quejosa promovió la demanda de garantías dentro de los quince días hábiles con que contaba al efecto, contados a partir del siguiente al en que se le aplicó y tuvo conocimiento del ordenamiento y actos de aplicación que tilda de inconstitucionales, por haber transcurrido entre una y otra fecha **catorce días**, esto es, el amparo se presentó el quinceavo día.

Por tanto, la causa de improcedencia en estudio es infundada, sin que pueda considerarse como primer acto de aplicación de las normas que se tildan de inconstitucionales el dos de junio de dos mil veintiuno, momento en el que se suscribió la escritura pública que se acompañó a la demanda de amparo, pues a través de la misma no se efectuó pago alguno, de ahí que no pueda

STEPHANIE GISELLE AGUIAR IBÁÑEZ
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.99.7
12/07/22 14:54:56

STEPHANIE GISELLE AGUIAR IBÁÑEZ
70.6a;66.20.63.6a;66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.99.7
12/07/22 14:54:56

STEPHANIE GISELLE AGUIAR IBÁÑEZ
70.6a;66.20.63.6a;66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.99.7
12/07/22 14:54:56

STEPHANIE GISELLE AGUIAR IBÁÑEZ
70.6a;66.20.63.6a;66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.99.7
12/07/22 14:54:56

[illegible]

STEPHANIE GISELLE AGUIAR IBÁÑEZ
70.6a;66.20.63.6a;66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.99.7
12/07/22 14:54:56

STEPHANIE GISELLE AGUIAR IBÁÑEZ
70.6a;66.20.63.6a;66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.99.7
12/07/22 14:54:56



(...).”

“Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo:

I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.”

Del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 5° y 107, fracción I, de la Ley de Amparo, se colige que el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad y se sigue siempre a instancia de parte agraviada, es decir, únicamente puede promoverlo la parte a quien perjudique la actuación combatida.

El presupuesto jurídico contenido en los preceptos antes transcritos (interés jurídico) representa uno de los elementos básicos para la procedencia del juicio, pues si los actos reclamados no lesionan la esfera

jurídica del gobernado, sino otros de variada índole que no tengan ese carácter, entonces no tendrá legitimación para instaurarlo.

En consecuencia, cuando se acude en demanda de amparo debe acreditarse en forma fehaciente que las actuaciones de la autoridad vulneran un derecho subjetivo protegido por la norma jurídica, o sea, que causan un daño, perjuicio o menoscabo al gobernado; de tal manera que si esta circunstancia no se encuentra plenamente demostrada, el juicio de amparo resultará improcedente.

Ahora, en los casos en los que se impugne la inconstitucionalidad de una norma general, a partir de su primer acto de aplicación, es decir, como heteroaplicativa, los sujetos que se consideren afectados por dicha norma, para comprobar su interés jurídico en el juicio de amparo, **deben demostrar ese primer acto de aplicación, por cualquiera de los medios de prueba previstos en las leyes,** a fin de probar la vinculación del acto con la ley cuya inconstitucionalidad se reclama.

Sirve de apoyo la tesis 25 de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 132, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que es del contenido:



Al respecto, resulta necesario establecer que cuando se acude al juicio de amparo a reclamar la inconstitucionalidad de una ley con motivo del primer acto de aplicación, técnicamente no es dable desvincular el estudio de la norma impugnada del examen del acto de aplicación, dado que ambos constituyen el conjunto de la litis del juicio constitucional, y su análisis en relación tanto con la procedencia como, en su caso, con el fondo del asunto, no debe desvincularse al incidir conjuntamente en la acción constitucional.

Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia 71/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 235, agosto de dos mil, Tomo XII, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, que establece:

STEPHANIE GISELLE AGUIAR IBANEZ
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.01.99.7
12/07/22 14:54:56



Así, en el caso concreto la parte quejosa **Luis Eduardo Fuentes Olivo**, reclama la inconstitucionalidad del artículo 20, fracciones I y XVII, en relación con los numerales 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno, que prevén el pago de derechos por los conceptos de inscripción de documento público o privado, inscripción de préstamo hipotecario, fomento a la educación, asistencia social y para la Universidad

Autónoma de Nayarit; aplicación del pago de tales conceptos que acreditó la parte quejosa, tal y como se desprende del análisis realizado en párrafos anteriores, por lo que es evidente que cuenta con interés jurídico en el presente juicio de amparo, en virtud de que la aplicación de las referidas disposiciones le causan perjuicio en su patrimonio, atento el pago que realizó por la cantidad que menciona.

Por tanto, se declara **infundada** la causa de improcedencia en estudio.

No existiendo diverso motivo de improcedencia
invocado por las partes o advirtiéndose que se actualice
alguno, procede estudiar el fondo del asunto.

Sin que obste a lo anterior, que el Jefe de la Unidad Jurídica en representación del Congreso del Estado de Nayarit, al rendir su informe justificado haya manifestado lo siguiente:

“a). Resulta indispensable establecer que las causales de improcedencia son materia de análisis por la autoridad federal, los cuales deben de estudiarse de manera oficiosa, según lo dispone el dispositivo 62 de la Ley de Amparo que a la letra dice:

'(Lo transcribe)'.

Por tanto la Ley establece la obligatoriedad para analizar de oficio la existencia de alguna



causal de improcedencia del juicio de amparo, aun cuando sea distinta a aquella a la que pretendió referirse esta autoridad tildada de responsable.

Al respecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado criterios firmes en este sentido, mismos que hacemos nuestros, y que nos permitimos transcribir de manera textual:

'(Los transcribe)'.

b). En este orden de ideas si el juzgador está obligado a efectuar un análisis del juicio de manera obligatoria, en estas circunstancias se precisa que el juicio de amparo es improcedente existiendo una sola causal de las relacionadas en el Capítulo VII de la Ley de Amparo y en consecuencia opera el sobreseimiento, toda vez que una sola causal, impide entrar al estudio de fondo respecto de los conceptos de violación, siendo por ello suficiente para decretar el sobreseimiento del juicio de garantías, siendo aplicable, la siguiente tesis jurisprudencial pronunciada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que me permito transcribir de manera textual:

‘(La transcribe)’.

En tal sentido, conviene señalar que si bien como lo aduce la citada autoridad responsable las causales de improcedencia deben estudiarse de oficio, también es cierto que no señala qué causal de improcedencia se actualiza en la especie, ni vierte razonamiento alguno tendente a probar la actualización de alguna, aunado a que la sola cita de una de las fracciones previstas en el artículo 61 de la Ley de la Materia en forma genérica o

STEPHANIE GISELLE AGUIAR IBÁÑEZ
70.6a;66.20.63.6a;66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.99.7
12/07/22 14:54:56

STEPHANIE GISELLE AGUIAR IBÁÑEZ
70.6a;66.20.63.6a;66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.99.7
12/07/22 14:54:56

STEPHANIE GISELLE AGUIAR IBÁÑEZ
70.6a;66.20.63.6a;66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.99.7
12/07/22 14:54:56

“IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INVOCA COMO CAUSAL ALGUNA DE LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIN EXPRESAR LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN SU ACTUALIZACIÓN, EL JUZGADOR DEBERÁ



ANALIZARLA SÓLO CUANDO SEA DE OBVIA Y OBJETIVA CONSTATACIÓN."

SEXTO. Transcripción innecesaria de conceptos de violación. No se transcribirán los conceptos de violación hechos valer, ya que tal omisión no infringe precepto legal alguno y en todo caso serán tomados en cuenta al momento de resolver el presente juicio de garantías.

Se invoca en apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, del Tomo XXXI, Mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro:

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN”.

SÉPTIMO. Estudio. Los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa son **fundados**.

En el caso, la parte quejosa reclama la inconstitucionalidad del artículo 20, fracciones I y XVII, 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano

de Nayarit, para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno, al considerar que transgreden en su perjuicio las garantías de proporcionalidad y equidad tributaria consagradas en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Le asiste la razón.

En principio, el acto de aplicación de los artículos reclamados, lo constituye el pago realizado por la cantidad de \$14,759.48 (catorce mil setecientos cincuenta y nueve pesos 48/100 moneda nacional), respecto de los conceptos de “INS. COMPRAVTA. MOB. PREST HIPOTE.”, “IMP. PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACIÓN”, “IMP. PARA LA ASISTENCIA SOCIAL”, “IMP. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT” “DER INSCR. INSTRUM. PÚBLICO O PRIVADO”, “DER. CANCELACIÓN DE INSCRIPCIONES”, “POR EL REGISTRO DE PODERES DE CUALQUIE” y “APORTACIÓN A LA CRUZ ROJA MEXICANA”, realizado el diecinueve de julio de dos mil veintiuno, a favor de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit; tal como quedó evidenciado en el considerando **cuarto** de esta sentencia.

Ahora, el artículo 31, fracción IV, Constitucional, establece la obligación de todos los ciudadanos mexicanos de realizar las aportaciones por concepto de contribuciones

“derechos”, su proporcionalidad y equidad se rige por un sistema distinto del que marca la pauta para el pago de los impuestos. Así lo ha sostenido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia visible en las páginas 212 y 213, del Tomo I, Materia Constitucional, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro dice:

“DERECHOS POR SERVICIOS. SU PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD SE RIGEN POR UN SISTEMA DISTINTO DEL DE LOS IMPUESTOS”.

Lo anterior, conduce a precisar que el principal efecto de los principios de proporcionalidad y equidad -desde el punto de vista de su aplicación al cobro de derechos-, es el de controlar que el costo que representa para el estado la prestación del servicio y la cuota que fije por el otorgamiento de dicha prestación, sea justa y equitativa.

En el caso, se tilda de inconstitucional el artículo 20, fracciones I y XVII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, en relación con los diversos arábigos 11, 12, y 13 del mismo ordenamiento legal, que por su orden, disponen:

“Artículo 11. El Impuesto para el fomento de la educación se causa con una tasa del 25 por ciento, de acuerdo con la Ley de Hacienda del Estado de Navarrit.”



“Artículo 12. El impuesto para la asistencia social se causa con una tasa del 15 por ciento, de acuerdo con la Ley de Hacienda del Estado de Navarrit.”

“Artículo 13. El impuesto para la Universidad Autónoma de Nayarit, se causa con una tasa del 12 por ciento, de acuerdo con la Ley de Hacienda del Estado de Nayarit.

La Secretaría de Administración y Finanzas, recaudará y enterará el impuesto especial de conformidad con lo siguiente:

1. Deberá enterar el impuesto al Patronato administrador de éste, en un plazo máximo de cinco días hábiles después de cada mes recaudado.

II. Contará con una cuenta bancaria específica para la recepción del ingreso y previa autorización de la autoridad competente, otorgará mandato especial e irrevocable a la institución bancaria en la que se aperture dicha cuenta, facultándola para transferir la totalidad de los saldos disponibles a la cuenta bancaria y número de referencia que proporcione el Patronato.

III. Dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes, presentará un informe ante el Patronato que registre las operaciones realizadas y el monto al que asciende los enteros realizados durante el mes inmediato anterior.

Dicho informe deberá formar parte del avance de gestión financiera trimestral correspondiente.”

ARTÍCULO 20.- Los Derechos por los servicios prestados en materia de Registro Público de la Propiedad y del Comercio, deberán ser pagados como sigue:

CONCEPTO	TARIFA
<p>1.- Por la inscripción de los Instrumentos públicos o privados en que se transmita la propiedad del Inmueble, y la de otros contratos, títulos o documentos de cualquier clase, con excepción de los que tienen cuota especial, el derecho se causará sobre la tasa del 0.6 por ciento.</p>	

Estas transmisiones de dominio se pagarán sobre el valor declarado para el pago del Impuesto sobre Adquisición de Bienes Inmuebles.

Si el registro se refiere al tracto breve, el pago de derechos será por cada uno de los Actos Jurídicos que contenga el título de propiedad.

Quando mediante programas específicos de vivienda promovidos por Organismos Federales, Estatales, Municipales o financiados por Instituciones de Crédito cuyo valor unitario por vivienda no exceda de \$639,663.00, se cubrirá la cantidad de \$300.00 sin adicionales.

III. Por inscripción de constitución o modificación por aumento y disminución de capital social, fusión, escisión de sociedades mercantiles, el derecho se causará sobre la tasa del 0.6 por ciento.

Tratándose de traslados de dominio que se relacionen con las sociedades mercantiles se estará a lo dispuesto por lo señalado en la fracción I de este artículo.

EXENTO

\$570.00



V. Por la inscripción de contrato de arrendamiento de cualquier clase, por más de 6 años.	\$570.00
---	----------

VI. Por cada una de las actas de asamblea, que no modifique el patrimonio de las Sociedades Mercantiles.	\$570.00
--	----------

VII. Por el registro de fraccionamientos de predios en lotes y manzanas.	\$5,689.00
--	------------

VIII. Por el registro de subdivisión de predios:

A) Hasta 2 lotes. \$650.00

B) De 3 a 6 lotes. \$813.00

C) De 7 lotes en adelante.	\$5,689.00
----------------------------	------------

IX. Por el registro de fusión de dos predios en adelante.	\$650.00
---	----------

X. Inscripción de providencias precautorias y embargos, sobre el valor del gravamen, uno por ciento.

El monto a pagar por estos conceptos, no excederá de \$76,760.00.

Cuando el Estado sea el acreedor. EXENTO

XI. Por la Inscripción de demandas y cédulas hipotecarias.	\$408.00
--	----------

XII. Registro de convenios Judiciales.	\$650.00
--	----------

XIII. Inscripción de documentos que no expresen el valor determinado.	\$408.00
---	----------

XIV. Ratificación de firmas y contenido de	\$324.00
--	----------

XV. Por cada anotación o rectificación de datos.	\$162.00
--	----------

XVI. Cancelación de inscripciones.	\$162.00
------------------------------------	----------

XVII.- Las inscripciones de compraventa mobiliaria, préstamos hipotecarios prendarios, refaccionarios o de habilitación o avío, sobre el valor de la operación 0.3 por ciento.

El monto a pagar por los conceptos de esta fracción, no excederá de \$76,760.00.

Cuando el préstamo hipotecario este destinado a casa habitación del adquirente y su valor unitario no sea superior a \$639,663.00, pagará el equivalente a \$300.00 sin adicionales.

**Por la inscripción de créditos refaccionarios,
sobre el valor de la operación 0.3 por ciento.**

Por la inscripción de créditos de habilitación o avío que se otorguen para actividades agropecuarias, se pagará:

- A) Personas morales; sobre el valor de la operación 0.3 por ciento.
- B) Personas físicas.

EXENTO

XVIII.- Por la inscripción de actos e instrumentos públicos mediante los cuales se reconozcan adeudos, reestructuren los plazos, montos, formas de pago o cuantía de créditos otorgados con anterioridad y cuya garantía estuviere previamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad.	\$650.00
---	----------

En los casos en que no se encuentra inscrito el contrato original, pagarán los derechos a que se refiere la fracción XVII.

XIX.- Registro de contrato de bienes de consumo duradero celebrado con Instituciones de Crédito.	\$570.00
--	----------

XX.- La inscripción de títulos o documentos que se registren en cumplimiento de las disposiciones en	EXENTO
--	--------



materia agraria, cuando éstas sean a favor de ejidos y comunidades a que se refiere la Ley Agraria.

XXI.- Certificación de existencia o inexistencia de gravámenes, por cada inmueble:

A) Hasta por 20 años.	\$162.00
-----------------------	----------

B) De más de 20 años.	\$324.00
-----------------------	----------

XXII.- Por la expedición de copia:

A) Certificada.	\$162.00
-----------------	----------

B) Simple.	\$80.00
------------	---------

XXIII.- Expedición de constancia.	\$162.00
-----------------------------------	----------

XXIV.- Depósito de testamento Ológrafo.	\$324.00
---	----------

XXV.- Por el registro de protocolización de manifestación de fincas urbanas. Quedan exentos los que se registren a favor del Gobierno del Estado.	\$1,222.00
---	------------

XXVI.- Registro de fianzas, sobre su valor 0.3 por ciento.

El monto a pagar por este concepto, no excederá del equivalente a \$76,760.00.

XXVII.- Registro de donaciones de toda clase de inmuebles. Quedan exentos los registros a favor del Gobierno del Estado.	\$570.00
--	----------

XXVIII.- Registro de escrituras de constitución al régimen de condominios.

A) De 2 a 20 Departamentos.	\$3,251.00
-----------------------------	------------



se cobrará un costo adicional al costo normal de:

XXXVI.- En los casos de permuta de inmuebles, los derechos de registro se causarán conforme a la fracción primera de este artículo y sobre el valor de cada uno de los inmuebles o derechos reales permutados.

XXXVII.- Certificados relativos a sociedades mercantiles o asociaciones civiles, por cada uno de ellos.	\$243.00
---	----------

XXXVIII.- Cuando el mismo título o documento contenga dos o más actos a inscribir, los derechos se causarán por cada uno de ellos, calculándose y pagándose por separado.

XXXIX.- Por el registro de poderes de cualquier clase.	\$650.00
--	----------

XL.- Por cada verificación o búsqueda de datos.	\$80.00
---	---------

XLI.- Por la inscripción de títulos mediante los cuales el Estado de Nayarit, Municipios del Estado de Nayarit y la Federación adquieran bienes inmuebles.

XLII.- Registro de Cesión de Derechos Litigiosos.	\$3,251.00
---	------------

XLIII.- Ratificación o Sustitución de garantías.	\$408.00
--	----------

XLIV.- Registro de Servidumbres.	\$324.00
----------------------------------	----------

XLV.- Por registro de tiempo compartido.	\$1,625.00
--	------------

XLVI.- Por el registro de capitulaciones matrimoniales.	\$650.00
---	----------



será la cantidad que arroje el avalúo comercial actualizado a la fecha en que se practique o avalúo catastral con valores actualizados de suelo y construcción en el ejercicio fiscal en que se presente.

LVI.- Asociación en Participación.

\$570.00

LVII.- Registro de instrumento que contenga cesión de derechos hereditarios, el derecho se causara sobre la tasa del 0.6 por ciento.

Estas transmisiones de dominio se pagarán sobre el valor declarado para el pago del Impuesto sobre Adquisición de Bienes Inmuebles.

De la lectura de las disposiciones transcritas, se advierte la tasa de causación de los impuestos ahí precisados –fomento a la educación, asistencia social y Universidad Autónoma de Nayarit-, así como el costo de los servicios que presta el Registro Público de la Propiedad y del Comercio.

Así, se tiene que el artículo 20, fracciones I y XVII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, establece una tasa de causación del cero punto seis por ciento (0.6%) sobre el valor del bien inmueble adquirido, y otra del cero punto tres por ciento (0.3%) sobre el valor de la operación, lo que implica que para determinar el monto de la contribución se toma en cuenta un elemento ajeno y no el costo del servicio que presta el Estado a través de la administración pública, pues el costo de las inscripciones calculado con

base en el valor del inmueble adquirido, no tiene relación directa o indirecta con el costo que para el Estado tiene la ejecución del servicio, el cual en todos los casos del numeral de mérito es similar.

Motivo por el cual, los causantes deberán pagar una mayor o menor cantidad dependiendo siempre del valor del inmueble y de la operación cuya inscripción se solicite en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, lo que provoca que las personas que acudan a solicitar la prestación de dichos servicios, sean tratados en forma desigual frente a la norma tributaria, lo cual ocasiona que por un mismo servicio se paguen cuotas diferentes.

En esas condiciones, las fracciones I y XVII del artículo 20 de la Ley de Ingresos para el Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, resultan violatorias de los principios de proporcionalidad y de equidad tributaria, previstos en la fracción IV, del artículo 31, de la Constitución General de la República.

Ahora, la parte quejosa también reclama el cobro de los impuestos por fomento a la educación, para la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, previstos en los preceptos 11, 12 y 13 de la citada ley de ingresos, que establecen los impuestos especiales o adicionales destinados al fomento a la educación, a la asistencia social y a la Universidad Autónoma de Nayarit.



En ese contexto, el artículo 78 de la Ley de Hacienda para el Estado de Nayarit, establece:

En lo que interesa, el anterior precepto establece que para determinar el monto de los **impuestos adicionales**, se tomará como base la cantidad determinada al pagar otros derechos.

Luego, si los impuestos para el fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit son adicionales, cuya base es el monto determinado por concepto de derechos por inscripción de documento público o privado y valor de la operación -préstamo hipotecario-, y se determinan aplicando las tasas previstas en los artículos 11, 12 y 13 de

la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit,
para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno.

Entonces, al ser inconstitucional el arábigo 20, fracciones I y XVII, de la referida ley ingresos, igual pronunciamiento debe hacerse respecto de los numerales 11, 12 y 13 en estudio, que establecen los impuestos especiales destinados al fomento a la educación, a la asistencia social y a la Universidad Autónoma de Nayarit, pues dichos preceptos legales forman parte del sistema de impuestos especiales que deben pagarse con motivo de la inscripción de un instrumento público ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, en el que, como ya se precisó, lo que se toma en consideración es el valor del bien inmueble adquirido y el de la operación a inscribir, lo cual, como se analizó, transgrede el principio de proporcionalidad tributaria.

En consecuencia, ante la inconstitucionalidad de las normas citadas, asiste razón a la parte quejosa en cuanto a que la aplicación de las referidas disposiciones le causa perjuicio en su patrimonio, atento el pago que realizó por la cantidad de \$14,759.48 (catorce mil setecientos cincuenta y nueve pesos 48/100 moneda nacional), en favor de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, por concepto de inscripción de documento público o privado, inscripción de préstamo



hipotecario, fomento a la educación, asistencia social y Universidad Autónoma de Nayarit, respecto del instrumento público **17,516.**

OCTAVO. Efectos de la concesión de amparo. En consecuencia, al resultar inconstitucional los artículos 20, fracciones I y XVII, 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, por violar los principios de equidad y proporcionalidad tributaria, lo que procede **es conceder** el amparo y protección de la Justicia Federal al **quejoso**, para los siguientes efectos:

1. Se desincorpore de la esfera jurídica del quejoso **Luis Eduardo Fuentes Olivo**, lo previsto en los artículos 20, fracciones I y XVII, 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, esto es, para que las autoridades responsables no apliquen a la parte quejosa, en el presente ni en un futuro tales preceptos legales, en tanto no se modifiquen dichas normativas.

2. Para que el **Director General de Ingresos** y el **Recaudador de Rentas**, ambos de la **Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit**, devuelvan a **Luis Eduardo Fuentes Olivo**, única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de **\$1,415.00 (mil cuatrocientos quince pesos 00/100**

moneda nacional) respecto de la suma de \$14,759.48
(catorce mil setecientos cincuenta y nueve pesos 48/100
moneda nacional), que pagó el diecinueve de julio de dos
mil veintiuno, el cual deberá estar debidamente
actualizado.

Sirve de apoyo, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 221/2007, consultable en la página 204 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Diciembre de 2007, Materia Administrativa, Novena Época, de rubro y texto:

“LEYES TRIBUTARIAS. EL EFECTO DEL AMPARO CUANDO SE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS NORMAS EN QUE SE FUNDÓ EL PAGO DE UNA CONTRIBUCIÓN, CONLLEVA EL DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES ENTERADAS DEBIDAMENTE ACTUALIZADAS (CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS).”

Esto último, pues al incidir la inconstitucionalidad aducida en elementos esenciales de la contribución analizada, la restitución correspondiente sólo implica que la parte quejosa deje de pagar la tarifa que le fue aplicada, sin relevarla de la obligación de enterar la cuota fija mínima que para el servicio inherente a inscripción o registro de documentos establece el último párrafo de la fracción I del artículo 20 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y



Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, que en la especie es la cantidad de \$300.00 (trescientos pesos 00/100 Moneda Nacional), la cual debe pagar por cada uno de los servicios cuya inscripción o registro solicitó la parte quejosa, sin las contribuciones adicionales que establece la referida disposición, más las cantidades de: \$162.00 (ciento sesenta y dos pesos 00/100 moneda nacional) que pagó por concepto de “DER. CANCELACIÓN DE INSCRIPCIONES”; \$650.00 (seiscientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional) que pagó por concepto de “POR EL REGISTRO DE PODERES DE CUALQUIE”; y \$3.00 (tres pesos 00/100 moneda nacional) que pagó por concepto de “APORTACIÓN A LA CRUZ ROJA”, en virtud de que dichos conceptos no fueron materia de impugnación en el presente juicio constitucional, además que el efecto del amparo no puede traducirse en liberar al contribuyente de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, en virtud que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva, que en el caso que nos ocupa, tal

[illegible]

“DERECHOS POR SERVICIOS. EFECTOS QUE PRODUCE LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY QUE PREVÉ EL MECANISMO DE CÁLCULO DE LA TASA QUE FIJA EL PAGO DE AQUÉLLOS.”

“LEYES DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. ALCANCES DEL AMPARO CONCEDIDO CON BASE EN LA JURISPRUDENCIA 2a./J.52/2008, DE RUBRO ‘DERECHOS POR EXPEDICIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN. EL ARTÍCULO 55 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2006, TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA.”



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Así como la jurisprudencia 2a./J.188/2004, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 470, Tomo XXI, enero de dos mil cinco, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro:

**“AMPARO CONTRA LEYES FISCALES.
OBLIGA A LAS AUTORIDADES
RESPONSABLES APLICADORAS A DEVOLVER
LAS CANTIDADES ENTERADAS.”**

Concesión que tiene consecuencias jurídicas en relación con los actos de aplicación futuros, conforme al artículo 77 de la Ley de Amparo.

Dicha conclusión se sustenta en la jurisprudencia P./J.112/99, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 19, Tomo X, noviembre de mil novecientos noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro dice:

“AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA.”

Por lo expuesto y fundado, se:

STEPHANIE GISELLE AGUIAR IBÁÑEZ
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.99.7
12/07/22 14:54:56

SEGUNDO. La Justicia de la Unión **AMPARA Y PROTEGE** a **Luis Eduardo Fuentes Olivo**, en contra de las autoridades responsables Congreso, Gobernador, y Director General de Ingresos y Recaudador de Rentas, ambos de la Secretaria de Administración y Finanzas, todos del Gobierno del Estado de Nayarit, por los actos que quedaron precisados en el considerando **segundo** del presente fallo, conforme a los razonamientos jurídicos establecidos en el considerando **penúltimo** y para los efectos señalados en su **último** considerando.

Así lo resolvió y firma **IVAR LANGLE GÓMEZ**,
Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil,
Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el
Estado de Nayarit, ante la Secretaria **Stephanie Giselle**
Aguiar Ibáñez, quien autoriza y da fe.





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:
17186205_1093000028534043007.p7m
Autoridad Certificadora:
Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal
Firmante(s): 2

FIRMANTE				
Nombre:	STEPHANIE GISELLE AGUIAR IBAÑEZ	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No. serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.99.71	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha: (UTC/ CDMX)	11/10/21 03:13:24 - 10/10/21 22:13:24	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA - SHA256			
Cadena de firma:	8f ca 4c 6f d4 80 f6 6c 17 50 09 ae 34 ca 8a f2 53 43 64 42 34 c8 23 71 e7 cd 61 e8 64 41 72 84 f1 3e 42 6d 61 63 ae be a0 15 d4 03 ed af 8c 60 be 2e 22 5f 46 d9 d9 e4 8a 4b 7a 9a 70 8e ac 06 cd 4b ff f6 c0 64 d7 82 2f 25 11 a7 36 0c 81 59 b3 37 cb 41 1f 7f c4 8a 31 94 9d 81 33 63 38 a2 46 d8 4f b7 89 f7 65 2c f5 a5 be 82 9f d0 d0 32 7d 55 94 50 85 03 2b be 3a 4a be bf c5 73 f8 ac 46 96 fd 76 89 df a4 8e af a0 c6 b0 2e 7d 9c b4 d6 ee 11 ac 6a 4f 88 0d 41 fe 25 f1 fd 12 2a 80 e3 08 1b 1f d5 25 f9 9b 40 ab e3 ae 38 1e cb cb a8 ea ae 27 e0 fd 41 ee d7 07 aa 19 eb 3a b8 ac 5f ce dc 07 f9 ae ec fd 70 1b 62 2d f3 39 e7 9e d5 94 5a 51 ac 54 71 0f 00 9e 8b b4 05 86 3b 67 47 e9 32 98 fb 26 14 76 0f 41 1a 6c f3 7a a0 b5 cd 03 c9 bb 0c a2 71 d7 15 7a 3c 0c a5 4c b0 e6			
OCSP				
Fecha: (UTC / CDMX)	11/10/21 03:13:25 - 10/10/21 22:13:25			
Nombre del respondedor:	OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.03			
TSP				
Fecha : (UTC / CDMX)	11/10/21 03:13:25 - 10/10/21 22:13:25			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	74881479			
Datos estampillados:	g/i30zHJQqLlw0LkztD+a7Mtz+8=			



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FIRMANTE				
Nombre:	Ivar Langle Gómez	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No. serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.31.ce	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha: (UTC/ CDMX)	11/10/21 14:07:41 - 11/10/21 09:07:41	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA - SHA256			
Cadena de firma:	89 75 23 60 be 09 7e b0 1c 53 9f 05 b0 e7 22 20 a2 98 7e 4f 18 4b 78 81 aa 33 1f 06 2e 82 16 93 c4 05 92 19 91 34 e2 55 fe 09 61 90 02 2b f7 6e 15 05 bc 85 a7 bd 6c f3 97 d7 8e 0a 1e f4 9a 29 6d 4c 63 e0 ec 52 8a 43 91 1b 7d b0 99 9b 2b 41 dd 29 34 d9 b2 8b 06 c5 4e f2 8e 7b 1d 24 34 7b 32 d9 00 da 88 35 f5 9f 74 4f 96 3f b0 b8 06 7b 88 6f 14 26 74 b0 8b 7c cc 58 92 ca 41 83 f2 80 0b 51 26 d3 9e 18 a8 e4 00 bd 94 a2 55 4c ec b5 3f f8 28 ed fe dd cf 51 7f 57 f3 34 50 50 2a 0c ec c8 d0 cf 92 09 6c 05 5a e3 5b 51 0b 12 f5 34 a5 e5 07 0d f3 8d 03 4e f6 2a 80 41 f0 1b 1b d4 6f 05 37 9d cf e3 81 a0 76 8f 95 1a 8e 9d a9 16 e6 d6 38 1d 1a db e2 a3 1e 08 b7 b0 00 bf a9 2d b0 3b 20 bc 23 1b c1 b3 e5 99 89 26 03 d1 33 a2 8c a6 1e a5 c9 52 7b f0 40 b8 5f dd 62 78 d7 45			
OCSP				
Fecha: (UTC / CDMX)	11/10/21 14:07:42 - 11/10/21 09:07:42			
Nombre del respondedor:	OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.03			
TSP				
Fecha : (UTC / CDMX)	11/10/21 14:07:42 - 11/10/21 09:07:42			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	74907276			
Datos estampillados:	w1wj/HBuSDYKw5xtQNetm/bfv+8=			